

## Respuesta a la consulta pública para la elaboración de una Carta de Derechos Digitales

### Consideraciones generales

Desde DigitalES, y de manera previa a abordar el texto objeto de la consulta pública, planteamos las siguientes **observaciones de partida**. Adicionalmente incluimos **modificaciones al texto** de la Carta propuesta, con sus consecuentes justificaciones

- Insistimos en la necesidad de **un debate inclusivo y profundo** que debe guiar un asunto como el de los derechos, abarcando todos los puntos de vista relacionados, y con una participación activa del sector privado en la elaboración de cualquier texto regulatorio.
- Pese a que **el texto se declara como sin valor normativo, el redactado de sus diferentes capítulos desmiente ese propósito**. No sólo ese redactado está formulado en términos vinculantes, sino que incluso figura un capítulo XXV de garantías sobre la tutela administrativa y judicial de los derechos previstos en la propia Carta. Convendría modificar este enfoque. El contenido de la Carta puede ser un conjunto de sugerencias fruto del trabajo de un Comité de Expertos, pero no debe crear (ni dar la apariencia de crear) nuevos derechos y obligaciones que afecten a particulares o empresas, los cuales en un sistema democrático han de ser fruto de los procedimientos de creación normativa constitucionalmente establecidos, con todas las garantías que ello comporta.
- El **nivel de detalle del texto se desvirtúa su propósito de ser un conjunto de principios o recomendaciones de política jurídica**, y se convierte en un elemento disonante en el marco de la legislación ya existente –que unas veces parece expandir y otras restringir– y de la que se halla en preparación en la UE, como el paquete de *Digital Services Act*.
- En muchos de los temas que la Carta contempla **existe ya una regulación en diferentes textos legales** (por ejemplo, **RGPD** – Reglamento General de Protección de Datos - o **LOPDGDD** – Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos Digitales). En estos casos, la regulación que contemple la Carta no debería diferir de la que emana del texto legal de que se trate. Lo contrario puede llevar a confusión (especialmente porque se trata de un texto promovido o avalado por el propio Ministerio de Asuntos Económicos) sobre la propia interpretación de los textos legales y perjudicar su aplicación. A modo de ejemplo, en el art. II se contempla la protección de datos. En el apartado II.2 se menciona el derecho al acceso y rectificación de los datos, ante esto, surgen varias dudas *¿Por qué no figuran los otros derechos previstos en el RGPD y la LOPDGDD? ¿Hay derechos más y menos importantes?*
- Teniendo en cuenta que el contexto digital está en constante movimiento y evolución, el desarrollo de preceptos relativos a estos temas debería ofrecer la **flexibilidad necesaria** para poder ir adaptándose, siendo necesario evitar vías rígidas que pueden revelarse insuficientes o inapropiadas posteriormente en función de esa evolución
- Desde DigitalES apoyamos el reconocimiento de derechos de los ciudadanos, pero cualquier norma que se apruebe en ese sentido, y en la medida que esos derechos supongan una **obligación para**

agentes privados, debe tener en cuenta que debe hacerse el correspondiente análisis de impacto económico, y debe habilitarse la correspondiente partida en los presupuestos generales del Estado.

- Consideramos que cualquier norma que se apruebe en el ámbito de los derechos digitales - y también cualquier recomendación de consagrar derechos y obligaciones específicos— debe **tener en cuenta y ser coherente con las distintas iniciativas en curso en el ámbito legislativo de la UE**, evitando anticipaciones que puedan suponer sobre regulación, precipitación o incluso incoherencias.
- En relación con la protección efectiva de esos derechos, España debería avanzar hacia un **verdadero level-playing field** o equilibrio entre agentes que compiten en el mismo mercado. Debiendo **garantizar el cumplimiento de las mismas obligaciones en materia de protección de los usuarios por todos los actores** evitando así la imposición de obligaciones adicionales sobre los actores tradicionales que agranden la brecha ya existente con otros agentes, e incrementen de manera desproporcionada e injustificada los costes para dichos actores.
- **El fomento de la colaboración público-privada de la industria antes que la regulación unilateral**, es preferible siempre para aprovechar los beneficios que aporta la tecnología y limitar los excesos sin dañar la innovación. La aplicación y cumplimiento desigual de las normas de protección de los derechos vigentes están distorsionando los mercados y hace que las empresas se enfrenten a una injusta desventaja competitiva.
- **Antes de ampliar o regular sobre ningún derecho debe analizarse si dichos derechos son realmente nuevos o son simple manifestaciones** en el ámbito digital de derechos ya regulados en el ámbito analógico (en cuyo caso, se requeriría una “interpretación” adaptada de dichos derechos, pero no una nueva regulación específica).

## CARTA DE DERECHOS DIGITALES

### DERECHOS DE LIBERTAD

#### I

#### Derechos y libertades en el entorno digital

1. Los derechos fundamentales y libertades reconocidos en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España están garantizados en el entorno o espacio<sup>1</sup> digital.
2. Todas las personas poseen idénticos derechos en el entorno digital y en el analógico, sin perjuicio de las limitaciones que de acuerdo con la Constitución y las leyes pudieran establecerse atendiendo a las peculiaridades de cada ámbito.
3. Las leyes concretarán, en cuanto sea necesario, las especificidades de los derechos en el entorno digital y regularán su desenvolvimiento y efectividad estableciendo garantías y promoviendo la igualdad en el ecosistema digital.
4. Los procesos de transformación digital, el desarrollo y el uso de la tecnología digital, así como cualquier proceso de investigación científica y técnica relacionado con ellos o que los utilice instrumentalmente, deberán tener presente la exigencia de garantizar la dignidad humana, los derechos fundamentales, el libre desarrollo de la personalidad y ordenarse al logro del bien común.
5. El principio de cumplimiento normativo desde el diseño deberá aplicarse íntegramente al desarrollo científico y tecnológico, así como a sus resultados. Los desarrollos científicos y tecnológicos contemplarán en la determinación de sus requerimientos un análisis sobre el cumplimiento de tal principio.

#### II

#### Derecho a la protección de datos

1. Toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que le conciernan.
2. Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre las bases legitimadoras reguladas en el art 6 del Reglamento General de Protección de Datos o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. ~~Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación.~~ Toda persona tiene derecho a ejercitar los derechos que le reconozca la legislación vigente.

~~3. El respeto de estas normas estará sujeto al control de una autoridad independiente.~~

#### Justificación:

---

<sup>1</sup> A los efectos de esta Carta, por entorno digital se entiende el conjunto de sistemas, aparatos, dispositivos, plataformas e infraestructuras que abren espacios de relación, comunicación, interrelación, comercio, negociación, entretenimiento y creación que permiten a las personas físicas o jurídicas de forma bilateral o multilateral establecer relaciones semejantes a los existentes en el mundo físico tradicional. Espacio digital se refiere a los lugares digitales que abren los entornos digitales en los que es posible la comunicación, interrelación, comercio, negociación, entretenimiento y creación de forma especular con el mundo físico tradicional. La ciudadanía digital se refiere al estatuto de derechos y obligaciones de la persona, con independencia de su estatuto jurídico de nacional

*Deberían incluirse otras bases legitimadoras para tratar datos personales. La Carta especifica que el consentimiento es la única base legitimadora para tratar los datos personales. Existen otras bases legitimadoras de tratamiento en el Reglamento de Protección de Datos (art 6 del RPDG) que no se reflejan en este texto y deberían incluirse.*

### III

#### Derecho a la identidad en el entorno digital

~~1. Se reconoce el derecho a la propia identidad en el entorno digital, de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacional y europeo.~~

~~2. La identidad no podrá ser alterada, controlada o manipulada por terceros contra la voluntad de la persona.~~

~~3. Se establecerán las garantías que permitan preservar y controlar la propia identidad en el entorno digital.~~

---

#### Justificación:

*La redacción de este derecho resulta demasiado genérica y puede derivar e incluso fomentar un tratamiento diferente de la identidad en el plano digital y analógico. Las garantías deberán ser, como en los demás casos, las que se establezcan en cada caso en el ordenamiento jurídico.*

*Tampoco consideramos que debería permitirse como un derecho a disponer una identidad distinta en el plano digital, lo cual plantearía sus propios inconvenientes jurídicos e incluso a nivel de seguridad de la información.*

*En definitiva, se propone la eliminación de este apartado puesto que se considera innecesario articular derechos específicos sobre la identidad en este plano, cuando la identidad es algo que trasciende el plano digital y debe aplicar a cualquier contexto, sin generar rupturas innecesarias entre los planos analógico y digital*

### IV

#### Derecho al pseudonimato

1. De acuerdo con las posibilidades técnicas disponibles, los entornos digitales permitirán el acceso en condiciones de pseudonimidad, **siempre y cuando no sea necesaria la identificación personal para el desarrollo de las tareas propias de dicho entorno**

2. El diseño de la pseudonimidad a la que se refiere el párrafo anterior asegurará la posibilidad de reidentificar a las personas en los casos y con las garantías previstos por el ordenamiento jurídico.

---

#### Justificación:

*La pseudanización es una medida de seguridad (no un derecho) mencionada repetidamente en el RPDG. Conforme el art. 32 del RPDG esta medida deberá atender al estado de la técnica, los costes de aplicación, y la naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento, así como riesgos de probabilidad y gravedad variables para los derechos y libertades de las personas físicas. Incluir como derecho una medida de seguridad que el responsable del tratamiento debe definir atendiendo a razones de necesidad y riesgo es, a nuestro juicio, contrario al RPDG, ya que habrá tratamientos que no requieran pseudanización.*

*Tal y como acabamos de indicar, no todos los entornos digitales justifican un derecho de pseudonimidad de los ciudadanos. Existen múltiples entornos digitales (ej. de relación con administraciones públicas, banca, viajes...) en donde se debe garantizar la obligatoriedad de identificación de las personas.*

*La admisión del pseudonimato en el acceso a entornos digitales ha de ser en todo caso fruto de las decisiones de cada uno de los operadores que intervengan en ese entorno, y no puede formularse como un derecho general.*

*La actual redacción de este derecho provoca incongruencias y dudas interpretativas.*

*En primer lugar, este derecho viene a generar problemas interpretativos con las medidas de salvaguarda en materia de pseudonimización previstas en la propia normativa de protección de datos, dado que una cosa es tener la posibilidad de utilizar un servicio digital de forma pseudónima y otro que el tratamiento de datos se realice de forma pseudónima.*

*En segundo lugar, este derecho también viene a generar incongruencias con otras normas, las cuales exigen una identificación directa de las personas (no sólo tener la posibilidad de reidentificar, tal y como se prevé en el apartado IV.2 de la Carta). Entre estas normas se incluye la de prevención del blanqueo de capitales, la ley de conservación de datos (la cual exige a los operadores de telecomunicaciones llevar un libro registro para clientes prepago) e incluso, la propia normativa de protección de datos exige a los responsables del tratamiento actuar y poder demostrar una diligencia debida en diversos ámbitos que pueden impactar a este derecho (medidas de seguridad en mecanismos de autenticación, calidad de los datos, carga de la prueba a la hora de demostrar la obtención del consentimiento, identificación expresa para el ejercicio de derechos, etc.)*

*Es más, son múltiples las sanciones de las autoridades de protección de datos en donde se ha considerado la realización de un tratamiento ilícito de protección de datos porque el responsable no ha sido lo suficientemente diligente a la hora de identificar al interesado.*

*En tercer lugar, este derecho viene a generar incluso otras incongruencias con otros derechos previstos en la propia Carta, como es el derecho a la libertad de empresa en el ámbito digital, ya que el apartado IV.1 de la Carta preestablece cómo las empresas deben configurar sus servicios en el entorno digital para permitir un acceso pseudónimo a los mismos.*

*Es decir, este derecho presume que el uso pseudónimo debe ser la opción por defecto y condena en cierto modo el uso habitual en condiciones de identificación directa, todo ello de forma innecesaria, condicionando la libertad de empresa sin basarse en una norma y generando múltiples problemas interpretativos a nivel jurídico.*

*No obstante, la realidad jurídica es que el uso de servicios digitales mediante identificación directa es legal, recomendable e incluso exigida por la normativa en algunos casos, aspectos que hacen innecesario determinar un derecho al pseudonimato en el plano digital.*

*La promoción de una identidad digital anonimizada o pseudonimizada puede también generar mayores riesgos en las interacciones en redes sociales, fake news, etc.*

*En conclusión, todo lo anterior hace necesario resolver las incongruencias y dudas interpretativas generadas por la redacción de este derecho.*

## V

### Derecho a no ser localizado y perfilado

1. El derecho a la libre autodeterminación individual y la garantía de las libertades comporta el derecho a no ser objeto de localización **individualizada**, ni a ser sometido a análisis de la personalidad o conducta que impliquen el perfilado de la persona.
2. Sólo serán posibles tales tratamientos de información personal con el consentimiento de la persona afectada o en los casos y con las garantías previstos en las leyes.

---

#### Comentarios:

*Este es un derecho que, tal y como está redactado, viene a modificar y extender injustificadamente la regulación ya prevista en la normativa, en concreto en la normativa de protección de datos. Esto hace que sea especialmente alarmante, ya que afecta directamente a la capacidad de desarrollo en planos tan estratégicos como el de la Inteligencia Artificial o el Big Data, tecnologías vertebradoras de la industria digital.*

*En primer lugar, este derecho viene a considerar la localización y la elaboración de perfiles como un límite a la autodeterminación individual y la garantía de libertades. Se trata, por lo tanto, de una presunción injustificada y que no tiene ninguna base jurídica ni tecnológica.*

*A este respecto, es preciso indicar que la localización y la elaboración de perfiles no son otra cosa más que operaciones del tratamiento de datos, y que no son una finalidad del tratamiento en sí misma. Por ello, se presupone injustificadamente un riesgo sin atender a la finalidad para la que se utilicen dichos datos.*

*Es más, bien podría ocurrir no sólo que estas operaciones del tratamiento no sean un límite a la autodeterminación individual y a la garantía de libertades, sino que el uso de estas técnicas sirvan y apoyen su materialización práctica.*

*Por lo tanto, hay múltiples ejemplos donde estas técnicas son inocuas o positivas para la ciudadanía, motivo por el cual no se puede presumir su impacto negativo, al ser un medio del tratamiento y no un fin en sí mismas.*

*En segundo lugar, el apartado V.2 de la Carta, parece exigir que estas técnicas sólo se puedan realizar bien con el consentimiento de la persona o por una obligación legal; ello, de nuevo, sin tener en cuenta la finalidad del tratamiento. Esto es especialmente problemático, puesto que existen múltiples ejemplos donde el uso de estas técnicas está justificado, sin que sea necesario para cumplir una obligación legal y donde tampoco sea necesario contar con el consentimiento del interesado. Se trata de tratamientos de datos como, por ejemplo, con fines de seguridad, mejora de calidad de servicio, detección y prevención de fraude y blanqueo de capitales, detección y prevención de incidencias, etc. También existen tratamientos de datos basados en estas tecnologías que son necesarias para la ejecución de un contrato (p.ej. un recomendador de contenidos), sin que sea necesario contar con el consentimiento o basarse en una obligación legal; todo ello, además, sin suponer un incumplimiento de la normativa.*

*No puede establecerse la preeminencia del consentimiento como base legitimadora de los tratamientos de datos personales pues, tal y como indican las autoridades de protección de datos, el consentimiento no es más que una base legitimadora más, siendo lo importante el principio de la licitud del tratamiento.*

*Esto hace que la redacción actual de este derecho establezca limitaciones no previstas en la normativa actual que ya regula estas tecnologías (RGPD y LOPD, ePrivacy, LSSI y Ley General de Telecomunicaciones, etc.) e, incluso, incompatibles con la interpretación de las autoridades de protección de datos encargadas de interpretar dichas normas.*

*En conclusión, se hace necesario resolver estas incongruencias y respetar los principios rectores de las normativas que actualmente ya regulan el uso de estas tecnologías, las cuales no prevén las limitaciones incorporadas en la Carta.*

## VI

### Derecho a la seguridad digital

1. Toda persona tiene derecho a la seguridad en el entorno digital.
2. Los poderes públicos adoptarán y promoverán las medidas necesarias para garantizar aquélla, en colaboración siempre con las empresas tecnológicas y con los usuarios.

## VII

### Derecho a la herencia digital

1. Se reconoce el derecho a la herencia digital de todos los bienes y derechos de los que sea titular la persona fallecida en el entorno digital **que sean transmisibles por causa de muerte**.
2. El acceso a contenidos y servicios digitales de los que fuera titular la persona fallecida se hará conforme a las reglas generales del Código Civil, las leyes de las Comunidades autónomas con derecho civil, foral o especial, propio y el Título X de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

---

#### Comentarios:

*Se solicita clarificar el concepto de “herencia digital”.*

#### Justificación:

*Habría que clarificar a qué nos estamos refiriendo exactamente al hablar de “herencia digital”. No queda claro si, por ejemplo, se trata de un perfil digital en una red social, de las fotos de la persona compartidas en esa red social o de las fotos almacenadas en Cloud. No todos los derechos son transmisibles. Por ejemplo, porque lo excluya el servicio contratado con el operador que tenga contenido del fallecido.*

## DERECHOS DE IGUALDAD

## VIII

### Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital

1. Se reconoce el derecho a la igualdad en los entornos digitales, la no discriminación y la no exclusión. En particular, se reconoce el derecho a la igualdad efectiva de mujeres y hombres en entornos digitales. Los procesos de transformación digital aplicarán la perspectiva de género.
2. Los poderes públicos impulsarán políticas ordenadas a la garantía del acceso efectivo de todas las personas a los servicios y oportunidades que ofrecen los entornos digitales en cualquiera de sus dimensiones, garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones, atendiendo particularmente a la brecha territorial y asegurando un derecho de acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio a Internet para toda la población.

---

#### Comentarios:

*La Carta no especifica cómo se aplicaría la perspectiva de género en los procesos de transformación digital.*

## IX

### Protección de menores en el entorno digital

1. Los progenitores, tutores, curadores o representantes legales procurarán que los menores de edad hagan un uso equilibrado y responsable de los dispositivos, de los entornos digitales y de los servicios de la sociedad de la información a fin de garantizar el adecuado desarrollo de su personalidad y preservar su dignidad y sus derechos fundamentales.
2. Los centros educativos y cualesquiera personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades en entornos digitales en las que participen menores de edad garantizarán la protección del interés superior del menor y sus derechos fundamentales, especialmente el derecho a la protección de datos personales, en la publicación o difusión de sus datos personales a través de servicios de la sociedad de la información.
3. Salvo en las excepciones previstas en las leyes, se prohíben los tratamientos de la información de los menores orientados a establecer perfiles de personalidad en entornos digitales.
4. Se consideran ilícitas las prácticas de perfilado susceptibles de manipular o perturbar la voluntad de los menores y, en particular, la publicidad basada en este tipo de técnicas.
5. Se impulsará el estudio del impacto en el desarrollo de la personalidad de los menores derivado del acceso a entornos digitales, así como a contenidos nocivos o peligrosos. Dicho estudio prestará particular atención a sus efectos en la educación afectivo-sexual, las conductas dependientes, la igualdad de género, así como los comportamientos antidemocráticos, racistas y violentos.

---

#### Comentarios:

*La misma problemática y preocupaciones indicadas para el derecho a no ser localizado y perfilado son, si cabe, más relevantes en este derecho. En línea con lo indicado anteriormente, **este derecho establece limitaciones no previstas en la normativa** que actualmente ya regula la protección de los menores en el entorno digital y, concretamente, al tratamiento de sus datos personales en lo que a la elaboración de perfiles respecta.*

*La normativa de protección de datos no prohíbe la elaboración de perfiles de menores y también permite que los mayores de 14 años, pese a ser menores de edad, tengan control sobre sus propios derechos de protección de datos.*

*Todos estos aspectos son obviados en la Carta, la cual prohíbe injustificadamente el perfilado de menores, salvo en los casos en que sea requerido por la ley. Es decir, **obvia que los menores de edad, que sean mayores de 14 años, pueden, de hecho, consentir la elaboración de perfiles y que existen múltiples casos más allá del cumplimiento de la obligación legal donde la elaboración de dichos perfiles puede tener lugar de forma legal y justificada.***

*La disposición adicional decimonovena de la LOPD establece un mandato al gobierno para que remita en el plazo de un año lleve al Congreso un Proyecto de Ley dirigido específicamente a garantizar los derechos de los menores ante el impacto de Internet, con el fin de garantizar su seguridad y luchar contra la discriminación y la violencia que sobre los mismos es ejercida mediante las nuevas tecnologías.*

*En conclusión, se hace necesario respetar los principios rectores de las normativas que actualmente ya regulan el uso de estas tecnologías, las cuales no prevén las limitaciones incorporadas en la Carta.*

## X

### Protección de personas con discapacidad en el entorno digital

1. Se garantizará la accesibilidad de los entornos digitales a las personas con discapacidad, **atendiendo a criterios de pertinencia y proporcionalidad, en función de las necesidades de cada persona**, tanto



desde el punto de vista tecnológico como respecto de sus contenidos. En particular, asegurarán que la información relativa a las condiciones legales del servicio resulte accesible y comprensible.

2. Los entornos digitales, y en particular los que tengan por finalidad la participación política digital, asegurarán la participación efectiva de las personas con discapacidad o diversidad funcional.

3. Se garantizará el derecho a la educación digital de las personas con discapacidad.

---

## Comentarios:

*Se trata de un concepto demasiado amplio, hay muchos tipos de discapacidades y algunas de ellas hacen imposible o increíblemente costoso que tengan acceso a entornos digitales o incluso a contenidos. Este colectivo además es increíblemente vulnerable en caso de accesos a ciertos servicios como redes sociales.*

*Entendemos que debería introducirse una referencia a la valoración caso por caso. En cualquier caso, la normativa de desarrollo deberá sopesar las medidas que económicamente resulten más razonables y eficiente para alcanzar esos resultados, evitando a las empresas españolas incurrir en costes desproporcionados que mermen su competitividad en un entorno digital sin fronteras.*

## XI

### Protección de las personas mayores en el entorno digital

1. Se reconoce el derecho de las personas mayores al acceso a los entornos digitales.

2. Se garantizará la accesibilidad a los entornos digitales a las personas de este colectivo.

## DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y DE CONFORMACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO

## XII

### Derecho a la neutralidad ~~de Internet~~ digital

~~Los poderes públicos garantizarán el derecho de los usuarios a la neutralidad de Internet. Los proveedores de servicios de Internet proporcionarán una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos, en los términos previstos en el Reglamento (UE) 2015/2120 de 25 de noviembre de 2015, por el que se establecen medidas en relación con el acceso a una internet abierta, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.~~

## Nueva propuesta:

El derecho a la neutralidad de Internet debe abarcar a todos los agentes de la cadena de valor que mantengan una relación directa con los ciudadanos. En este sentido, los poderes públicos garantizarán este derecho de los usuarios, a una oferta transparente de servicios sin discriminación por motivos técnicos o económicos, por parte de todos /aquellos agentes de la cadena de valor que interaccionan para poder ofrecer servicios al usuario final, y que actualmente incluyen aquellos que proveen los sistemas operativos, a las tiendas de aplicaciones (AppStores) y a los dispositivos digitales entre otros y considerando la posibilidad de actualizaciones posteriores, consecuencia del previsible desarrollo del mercado y de los servicios.

## Justificación:

*La obligación de no discriminación del Reglamento (UE) 2015/2120 se refiere sólo a los proveedores de servicios de acceso a Internet. Sin embargo, para garantizar el acceso sin discriminación a los servicios de internet parece razonable que los poderes públicos extiendan esta obligación a otros agentes que también mantengan una relación directa con el usuario y ofrezcan a los consumidores servicios de internet.*

## XIII

### Libertad de Expresión y Libertad de Información

1. Todos tienen derecho a las libertades de expresión e información en entornos digitales en los términos previstos por la Constitución. Se garantizarán los principios constitucionales relativos a la veracidad, el pluralismo informativo y la diversidad de opiniones e informaciones.

2. Los responsables de medios de comunicación, así como los de los entornos digitales que tengan ~~o bien~~ por objeto el ejercicio de libertades del párrafo anterior por sus titulares ~~mediante un rol activo en la organización y puesta a disposición de la información bien provean tal servicio a sus usuarios~~ adoptarán protocolos adecuados para garantizar ~~la información y transparencia respecto a~~ los derechos de todas las personas a:

- a) Conocer cuándo la información sea elaborada sin intervención humana mediante procesos automatizados.
- b) ~~A conocer cuándo una información ha sido clasificada o priorizada por el proveedor mediante técnicas de perfilado o equivalentes.~~ Cuando esta información sea patrocinada por un tercero deberá informarse de modo específico sobre la naturaleza publicitaria de la misma.
- c) A solicitar del prestador la no aplicación de técnicas de análisis que permitan ofrecer información que afecte a las libertades ideológica, religiosa, de pensamiento o creencias.
- d) A posibilitar el ejercicio del derecho rectificación ya sea frente a medios de comunicación, ~~ya sea ante aquellos usuarios que difundan contenidos que atenten contra el derecho al honor, la intimidad personal y familiar en Internet y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz~~ atendiendo a los requisitos y procedimientos previstos en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación.

Cuando los medios de comunicación digitales deban atender la solicitud de rectificación formulada contra ellos deberán proceder a la publicación en sus archivos digitales de un aviso aclaratorio que ponga de manifiesto que la noticia original no refleja la situación actual del individuo. Dicho aviso deberá aparecer en lugar visible junto con la información original.

- e) A solicitar motivadamente de los medios de comunicación digitales la inclusión de un aviso de actualización suficientemente visible junto a las noticias que le conciernan cuando la información contenida en la noticia original no refleje su situación actual como consecuencia de circunstancias que hubieran tenido lugar después de la publicación, causándole un perjuicio.

En particular, procederá la inclusión de dicho aviso cuando las informaciones originales se refieran a actuaciones policiales o judiciales que se hayan visto afectadas en beneficio del interesado como consecuencia de decisiones judiciales posteriores. En este caso, el aviso hará referencia a la decisión posterior.

3. Los procesos de verificación y retirada de contenidos se limitarán a aquellos que en entornos digitales se encuentran limitados por la prohibición de censura previa. En los supuestos en los que la ley ampare la retirada de un contenido, los prestadores ~~a los que hace referencia el apartado 2 del presente Título XIII~~

deberán notificarla al usuario y disponer de un procedimiento de reclamación de estas decisiones. Se impulsarán mecanismos de autorregulación transparentes que contemplen los criterios y los procedimientos que determinan en este ámbito la actuación de los prestadores e incorporen procedimientos de reclamación y revisión de las decisiones de retirada de contenidos.

---

## **Comentarios:**

Se propone la modificación parcial del punto 2.

## **Justificación:**

*La libertad de expresión es uno de los principios consagrados dentro de la Unión Europea, que comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones, respetando la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. En este sentido los medios de comunicación son los mecanismos a través de los cuales se transmite información al público y cumplen junto con los medios audiovisuales, con su objetivo principal de proveer contenidos para informar, entretener o educar al público en general y para lo que deben cumplir con ciertas salvaguardias. Adicionalmente, la evolución y la proliferación de servicios en internet, ha dado lugar a la posibilidad de difundir dicha información de manera interpersonal (comunicaciones dentro de un contexto más privado, entre dos, tres o más personas, un ejemplo son los correos electrónicos, el teléfono, etc).*

*Por tanto, una cuestión es la información y su contenido (de la cual son responsables los autores de la misma) y otra es el medio/canales a través de los cuales el contenido viaja y llega a su(s) destinatario/os. No obstante, existen otros agentes que son meros "transitadores" que desconocen el contenido de la información y, por ello, no pueden garantizar derechos de cuyo contenido no son responsables. Esta distinción debería quedar clara a lo largo de todo el texto.*

*La garantía de los derechos sobre un contenido sólo puede recaer en aquellos agentes que tienen un rol activo en la preparación, organización y difusión o puesta a disposición de los mismos.*

*Por último, tampoco se puede obviar la actual situación de relaciones en la cadena de valor de servicios digitales, más amplia respecto de los servicios tradicionales (telecomunicaciones, audiovisuales o de sociedad de la información), para conseguir de forma efectiva los objetivos que se propone en esta Carta, entre ellos la defensa de los derechos de los usuarios y una competencia sostenible.*

**Se propone la eliminación parcial del apartado 2.b. En concreto la frase: "Conocer cuándo una información ha sido clasificada o priorizada por el proveedor mediante técnicas de perfilado o equivalentes".**

*Los requisitos de información y transparencia no deben entenderse como "sobre-información" que podría generar alarma y preocupación innecesaria en los ciudadanos. En este sentido, toda obligación de transparencia es una buena noticia si está "enfocada hacia el individuo", y no "enfocada hacia la regulación".*

*Los procesos de verificación de contenidos es objeto de regulación en diversas normativas en marcha a nivel europeo, por lo que sería conveniente evitar regulaciones que puedan diferir de lo previsto en ellas.*

## **Sobre el apartado 2d**

*El derecho de rectificación y el del honor son ámbitos diversos, con remedios diversos. La protección del derecho al honor, la propia, intimidad y la propia imagen pasa por la acción judicial, y por tanto no ha de ser contemplada aquí.*

*Apartado demasiado específico sobre formalidad de reacción del medio al ejercicio del derecho de rectificación, y se solicita remitir este aspecto a la ley sobre el derecho de rectificación, y a la jurisprudencia existente sobre su aplicación.*

## **Sobre el apartado 2e**

*Se sugiere hacer referencia únicamente al derecho al olvido en los términos establecidos en la ley de protección de datos (art. 93)*

#### XIV

### Derecho a la participación ciudadana por medios digitales

1. De acuerdo con las leyes, se impulsarán procedimientos de participación de las personas en la vida pública.

Para ello, se promoverán entornos digitales que contribuyan a un derecho de acceso efectivo a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas, así como a la propuesta, e implicación de las personas en las actuaciones de las Administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales, de acuerdo con la Constitución.

2. Los procedimientos de participación ciudadana garantizarán condiciones de igualdad sin discriminaciones ni exclusión de personas, con sujeción al ordenamiento jurídico.

#### XV

### Derecho a la educación digital

1. El sistema educativo garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales.

2. El profesorado recibirá la formación para adquirir las competencias digitales y la formación necesaria para la enseñanza y transmisión de los valores y derechos referidos en el apartado anterior.

3. En particular los poderes públicos con competencia en la materia promoverán:

- a) Los planes de formación profesional que se ordenarán a la inserción de las personas trabajadoras en los procesos de transformación digital.
- b) La formación de personas adultas con particular atención a los mayores.
- c) La educación audiovisual en el entorno digital, con la finalidad de promover la capacidad crítica y afrontar las prácticas de desinformación.

4. Se reconoce el derecho a la libertad de acceso a la educación y a la libertad de creación de centros que presten sus servicios a través de entornos digitales, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes respecto al cumplimiento de la normativa educativa y de la obligación de la escolarización presencial en los niveles de educación obligatoria.

5. Se impulsará la Educación para la Ciudadanía Digital, porque una parte esencial de la estrategia de digitalización de la educación pasa por el desarrollo de competencias que permitan que el uso de las tecnologías sea beneficioso para cada individuo y para el conjunto de la sociedad. Esta dimensión pasa por cuestiones como:

- a) **Concienciación sobre el concepto de identidad digital** y que los estudiantes aprendan a hacer un uso ético de las herramientas digitales en cuestiones como el uso de datos y el respeto a la privacidad ajena; o la identificación de información y comportamientos en la red que puede comprometer su salud o bienestar y la de terceros.

Fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico que les ayude a distinguir hechos objetivos de meras opiniones sin evidencias, que les permitan rechazar estereotipos discriminadores, los discursos de odio o el ciber acoso.

- b) Fomentar también la capacidad de participar en la generación de información de manera activa, creativa y, sobre todo, responsable.
- c) Atender la diversidad de talentos y de procesos y ritmos de aprendizaje, particularmente aquéllos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo.

## XVI

### Derechos digitales de la ciudadanía en sus relaciones con las Administraciones públicas

1. Se reconoce el derecho de igualdad en el acceso a los servicios públicos y en las relaciones digitales con las Administraciones públicas. A tal fin se promoverán políticas públicas activas que garanticen el acceso a los sistemas y los procedimientos.
2. El poder público autor de una actividad en el entorno digital deberá identificar a los órganos responsables de la misma.
3. El principio de transparencia y de reutilización de datos de las Administraciones públicas guiará la actuación de la Administración digital, de conformidad con la normativa sectorial. En particular, se garantizará el derecho de acceso a la información pública, se promoverá la publicidad activa y la rendición de cuentas y se velará por la portabilidad de los datos y la interoperabilidad de los formatos, sistemas y aplicaciones.
4. Siempre que sea posible se promoverá la universalidad y la neutralidad de las tecnologías usadas por las Administraciones públicas, así como su diseño y uso conforme a los principios éticos que acompañan a esta Carta. **Así mismo se adoptarán las medidas precisas para garantizar que la prestación de los proveedores de servicios que colaboren con ellos por medios digitales se realicen conforme a las disposiciones de esta Carta.**
5. Se ofrecerán alternativas en el mundo físico que garanticen los derechos de aquellas personas físicas que opten por no utilizar recursos digitales.
6. Los daños causados por actividades o decisiones digitales, podrán dar lugar a un derecho a la indemnización por toda lesión que las personas físicas o jurídicas sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, de acuerdo con las leyes.
7. Los derechos de la ciudadanía en relación con la Inteligencia Artificial reconocidos en esta Carta resultarán también de aplicación en el marco de la actuación administrativa, en particular en los aspectos referidos al diseño y al uso de algoritmos.

En todo caso, se reconoce el derecho a:

- a) Que las decisiones y actividades en el entorno digital respeten los principios de buen gobierno y el derecho a una buena Administración digital.
- b) Un procedimiento de toma de decisiones con las debidas garantías.
- c) Obtener una motivación comprensible en lenguaje natural de las decisiones que se adopten en el entorno digital, con justificación de las normas jurídicas relevantes al caso y de los criterios de aplicación de las mismas

- d) Que la adopción de decisiones discrecionales quede reservada a personas, salvo que una norma con rango de ley permita la adopción de decisiones automatizadas en este ámbito.

~~Será necesaria~~ Se recomienda realizar una evaluación de impacto en los derechos digitales en el diseño de los algoritmos en el caso de adopción de decisiones automatizadas o semiautomatizadas que pudieran afectar a personas físicas directa o indirectamente. En todo caso, serán objeto de aprobación previa de los sistemas algorítmicos que se vayan a usar para la toma de decisiones, con determinación de su ámbito concreto de aplicación y estructura de funcionamiento.

### Comentarios:

El texto señalado

*("(...) Así mismo se adoptarán las medidas precisas para garantizar que la prestación de los proveedores de servicios que colaboren con ellos por medios digitales se realicen conforme a las disposiciones de esta Carta"),* supone un conflicto con lo dispuesto en el punto II de esta Carta donde se establece que la base del tratamiento de datos personales es únicamente el consentimiento de la persona afectada. En concreto:

*II. 2. "Estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que le conciernan y a obtener su rectificación".*

Sería necesario modificar el punto II.2 e indicar las bases legitimadoras reguladas en el art. 6 del RGPD.

## DERECHOS DEL ENTORNO LABORAL Y EMPRESARIAL

### XVII

#### Derechos en el ámbito laboral

1. En el ámbito laboral trabajadores y los empleados públicos tienen derecho en las condiciones que la ley establezca a:

- a) La desconexión digital.
- b) La protección de su intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador, así como frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo, salvo que sea necesario por motivos de seguridad y así se informe mediante carteles que adviertan de la presencia de cámaras de videovigilancia.
- c) La intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización.

### Comentarios:

Se debe matizar si la medida resulta proporcional es válida. Los Tribunales han establecido recientemente que sistemas de geolocalización (i.e; coches de vendedores) es posible, pero con matices:

- (i) tiene que tener una clara finalidad empresarial encaminada a mejorar los servicios;
- (ii) debe ser comunicada a los empleados con carácter previo a su utilización/implementación (así como en su caso a la RLT) y
- (iii) siempre se debe buscar el método menos intrusivo que pueda combinar el derecho a la intimidad de los trabajadores y el derecho del empresario regulado en el art 20.3 del ET: "El empresario podrá

*adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad (...)"*.

En todo caso se garantizarán condiciones de trabajo digno en los entornos digitales.

2. Cuando la naturaleza del puesto y las capacidades de la organización lo permitan se promoverán condiciones de acceso al teletrabajo. En este caso, la ordenación de la prestación laboral se desarrollará con pleno respeto a la dignidad de la persona trabajadora garantizando particularmente su derecho a la intimidad, la esfera privada del domicilio, los derechos de las personas que residen en él y el derecho a la conciliación de la vida personal y familiar.

3. En los procesos de transformación digital:

- a) Deberá proporcionarse a las personas trabajadoras una formación adecuada que permita su adaptación a las nuevas condiciones laborales;
- b) Se informará a la representación de los trabajadores sobre los cambios tecnológicos que vayan a producirse en la empresa ~~y a participar en la toma de decisiones~~ sobre la transformación digital y las consecuencias laborales que la misma pueda implicar;

---

## Comentarios:

Con la redacción actual no queda claro el alcance de la frase “ (...) y a participar en la toma de decisiones (...)”.

La representación de los trabajadores ya tiene reconocidos una serie de derechos de información y consulta (art. 64, 40, 41, 51 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores - ET), entre lo que podríamos entender ya incluida su participación en cualquier cambio tecnológico o transformación digital relevantes que se pretendiesen introducir en la empresa y tuviesen consecuencias laborales.

La toma de decisiones iniciales sobre cualquier transformación que se pretenda introducir en la empresa debe quedar bajo el paraguas del poder de dirección del empresario y del derecho fundamental a la libertad de empresa (art. 20 ET y 38 de la Constitución Española - CE), todo ello sin perjuicio del derecho que ostenta la representación de los trabajadores de información y consulta en todas aquellas decisiones relevantes, y en especial aquellas que tuviesen consecuencias laborales. No se apoya el hecho de que deban PARTICIPAR de la transformación digital que la empresa adopte dentro de su capacidad de dirección.

Actualmente y como está redactado el art.64 ET sobre derecho de información y consulta nada se dice respecto a esta necesidad y creemos que para preservar la libertad de la empresa no debiera incluirse. Adicionalmente, el Art. 20 del ET otorga la dirección y control de la actividad laboral al empresario.

4. Sin perjuicio del derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada, salvo en los supuestos previstos por la ley, se informará a los representantes de los trabajadores y las personas directamente afectadas sobre el uso de la analítica de datos o servicios basados en Inteligencia Artificial en la gestión y seguimiento, en materia de recursos humanos y relaciones laborales. Este deber de información alcanzará como mínimo al conocimiento de los datos que se utilizan para alimentar los algoritmos, su lógica de funcionamiento y a la evaluación de los resultados.

---

## Comentarios:

Esto en parte ya se encuentra regulado como derecho que va más allá de la mera información y es el derecho a emitir informe previo a la ejecución de la medida (art.64 ET) sobre la implementación y revisión de sistemas de organización y control de trabajo o estudios de tiempos. Lo que no está regulado es que los representantes de los trabajadores tengan que ser informados durante los “procesos de toma de decisión”, por lo que pensamos debe eliminarse esa mención. Consideramos que las medidas que se adopten siempre tienen que ser basadas en el principio de proporcionalidad y en el estado de la ciencia en el momento de adoptar determinadas medidas y no anticiparse poniendo obligaciones ante situaciones venideras en el futuro.

## XVIII

### La empresa en el entorno digital

1. Se reconoce la libertad de empresa en los entornos digitales en el marco de la economía de mercado. El desarrollo tecnológico y la transformación digital de las empresas deberá respetar los derechos digitales de las personas.
2. Los poderes públicos promoverán la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación ordenados a la transformación digital de las empresas, el emprendimiento digital y el fomento de las capacidades de la sociedad para la generación de ciencia y tecnología nacionales.
3. Los poderes públicos velarán por que exista un nivel de competencia eficiente en el sector digital conforme a los postulados de la economía de mercado de forma que se asegure la existencia de una pluralidad de productos, servicios y proveedores y oferentes.
4. Se desarrollarán las condiciones que permitan la creación de espacios de pruebas controladas para desarrollar nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos basados en la tecnología (*sandbox*).

## DERECHOS DIGITALES EN ENTORNOS ESPECÍFICOS

## XIX

### Derecho de acceso a datos con fines de investigación científica, innovación y desarrollo

1. El uso de los datos del sector público ~~y privado~~ para el bien común se considera un bien de interés general. ~~En todo caso, en el caso de datos del sector privado ese uso estará sujeto a previa compensación en los términos establecidos por la ley.~~
2. En el marco definido por las leyes se promoverán condiciones que garanticen la reutilización de la información y el uso de los datos para promover la investigación, la innovación y el desarrollo.
3. Cuando se trate de datos personales:
  - a) Los datos podrán ser tratados con fines de investigación científica, innovación y desarrollo ~~previa anonimación.~~
  - b) ~~Únicamente será admisible el tratamiento de datos personales o pseudonimizados cuando la naturaleza de la actividad lo requiera y se cuente con el consentimiento o una autorización expresa prevista en norma con rango de ley~~



- c) Se promoverán programas de donantes de datos para fines de investigación.
- 

## Comentarios:

*Consideramos que estos derechos deberían abordarse de manera mucho más amplia para que sirvan realmente como principios inspiradores, no prejuzgando desde ya sobre tecnologías que están a día de hoy en un estado incipiente de desarrollo, como es el caso de la Inteligencia Artificial. En materia de nuevas tecnologías e innovación, consideramos que lo más razonable es abordar cualesquiera derechos digitales desde la propia normativa de desarrollo y no mediante esta Carta de Derechos Digitales, de tal forma que, - dependiendo del estado de la tecnología en cada momento -, puedan valorarse cuáles han de ser los derechos susceptibles de protección*

## Justificación:

*En lo relativo a la supresión propuesta en el apartado XIX.1, consideramos que este derecho debería aplicar solamente a los datos del sector público en línea con la Directiva 2019/1024 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. Respecto a los datos del sector privado, debería mantenerse el principio general de libertad contractual en el intercambio voluntario de dichos datos. De lo contrario, la innovación en aplicaciones de Big Data sufrirá drásticamente.*

*Cualquier iniciativa que imponga el intercambio de datos del sector privado es prematura teniendo en cuenta que no hay un fallo de mercado, ya que apenas existe un mercado, en comparación con la enorme oportunidad que se presenta.*

*El intercambio de datos entre empresas es un mercado incipiente que seguirá creciendo a medida que las empresas de todos los sectores avancen hacia modelos de negocio basados en datos. Lo mismo se aplica al intercambio de datos entre el sector privado y la Administración Pública.*

*Lo importante es crear los incentivos para un modelo de negocio sostenible en el que el uso responsable de los datos permitirá desarrollar políticas públicas más eficientes. Se creará así un círculo virtuoso en el que las Administraciones Públicas podrán reducir el gasto público y reducir impuestos en los ciudadanos, además de liberar presupuesto para compensar a su vez a las empresas que presten servicios basados en datos.*

*En lo relativo al apartado XIX.3 b) de la Carta, se excede de lo fijado por la normativa de protección de datos, cuando establece que únicamente se admitirá el tratamiento de datos personales para estas finalidades cuando se cuente con el consentimiento o sea requerido por una norma con rango de ley.*

*Sin embargo, la Carta vuelve omitir que la normativa de protección de datos establece toda una serie de bases legitimadoras adicionales, además del consentimiento y la ley para realizar esta finalidad, como puede ser el interés legítimo, el interés público, interés vital, etc. y presupone la compatibilidad de tratamientos posteriores para estos fines basados en la pseudonimización.*

*El RGPD, en la práctica, lejos de restringir exhaustivamente el tratamiento de datos de salud y datos genéticos con fines de investigación científica, innovación y desarrollo, lo que hace es habilitar otro cauce por el que la legitimación puede discurrir puesto que el artículo 9.2 también contempla la posibilidad de que este tipo de tratamiento de datos se lleve a cabo cuando “es necesario con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o fines estadísticos”.*

*El RGPD en su artículo 89 ahonda sobre las garantías que se deben cumplir para el tratamiento de datos no fundamentado en el consentimiento. En concreto menciona el principio de minimización y la pseudonimización.*

*En conclusión, se hace necesario resolver estas incongruencias y respetar los principios rectores de las normativas que actualmente ya regulan el uso de estas tecnologías, las cuales no prevén las limitaciones incorporadas en la Carta.*

En todo caso serán de aplicación el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y la legislación sectorial que corresponda.

4. El desarrollo de la investigación científica y tecnológica susceptible de repercutir en el ser humano respetará su dignidad y garantizará a toda persona, sin discriminación alguna, el respeto a su integridad y a sus demás derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.

5. La investigación en áreas como la neurociencia, la genómica o la biónica, entre otras, aplicará lo dispuesto en los párrafos anteriores y, en particular, garantizará el respeto a la dignidad, la libre autodeterminación individual, la intimidad y la integridad de las personas.

## XX

### Derecho a un desarrollo tecnológico y a un entorno digital sostenible

1. El desarrollo de la tecnología y de los entornos digitales deberá perseguir la sostenibilidad medioambiental y el compromiso con las generaciones futuras.
2. Los poderes públicos, **coordinada y eficazmente** impulsarán políticas ordenadas a la consecución de tales objetivos con particular atención a la sostenibilidad, durabilidad, reparabilidad y retrocompatibilidad de los dispositivos y sistemas evitando las políticas de sustitución integral y de obsolescencia programada.
3. Los poderes públicos promoverán la eficiencia energética en el entorno digital, favoreciendo la minimización del consumo de energía y la utilización de energías renovables y limpias.

---

#### Justificación:

*El actual reparto competencial establecido en la Constitución Española y la pluralidad de Administraciones y Poderes Públicos, en el pasado, por pluralidad y superposición de diferentes normativas medio ambientales, han originado situaciones de imposibilidad o ralentización de despliegue de redes e infraestructuras, lo que impide el desarrollo tecnológico y digital. La Ley 40/2015, de 1de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 140, establece como principios generales de las relaciones interadministrativas, entre otros, coordinación y eficacia*

## XXI

### Derecho a la protección de la salud en el entorno digital

1. Se reconoce el derecho de todas las personas al acceso a los servicios digitales de salud en condiciones de igualdad, accesibilidad y universalidad.
2. Los poderes públicos promoverán que la investigación y la tecnología contribuyan al logro de una medicina preventiva, predictiva, personalizada, participativa y poblacional.
2. El sistema de salud garantizará el desarrollo de sistemas de información que aseguren la estandarización, la interoperabilidad, el acceso y la portabilidad de la información del paciente.

3. El empleo de sistemas digitales de asistencia al diagnóstico, y en particular de procesos basados en inteligencia artificial no limitará el derecho a la libertad diagnóstica del personal facultativo.
4. Los entornos digitales de salud garantizarán el pleno respeto de los derechos fundamentales del paciente y en particular su derecho a ser informado y consentir en el tratamiento de sus datos personales con fines de investigación y en la cesión a terceros de tales datos cuando tal consentimiento sea requerido.
5. Los poderes públicos impulsarán el acceso universal de la población a los dispositivos tecnológicos desarrollados con fines terapéuticos o asistenciales.

## XXII

### Libertad de creación y derecho de acceso a la cultura en el entorno digital

1. Se reconoce el derecho a la libertad de creación en el entorno digital, promoviendo programas de formación en el sistema educativo y garantizando el derecho a la remuneración del personal creativo.
2. Se garantizará el acceso a la cultura en el entorno digital, en los términos de los artículos 44.1 y 149.2 de la Constitución Española, así como de la Convención de la UNESCO sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales, de 20 de octubre de 2005. En todo caso **se deberá respetar** ~~tendrán en cuenta~~ las normas sobre propiedad intelectual y **derechos afines** ~~derechos derivados~~.
3. En particular, los poderes públicos facilitarán el acceso digital a las diversas manifestaciones artísticas y culturales en espacios de su titularidad o de terceros con quienes colaboren de forma directa o indirecta. En particular, se promoverá el acceso digital a obras de dominio público.

## XXIII

### Derechos ante la Inteligencia artificial

1. En el desarrollo y ciclo de vida de los **servicios basados en Inteligencia Artificial**:
  - a) Se deberá garantizar el derecho a la no discriminación **algorítmica**, **contraria a los derechos y valores constitucionales** ~~cualquiera que fuera su origen, causa o naturaleza de sesgo~~ en relación con las decisiones y procesos basados en algoritmos.
  - b) Se asegurarán la transparencia, auditabilidad, explicabilidad y trazabilidad.
  - c) Deberán garantizarse la accesibilidad, usabilidad y fiabilidad.
2. Las personas tienen derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en procesos de decisión automatizada, ~~incluidas aquéllas que empleen procedimientos de inteligencia artificial~~, que produzcan efectos jurídicos o les afecten significativamente de modo similar, salvo en los supuestos previstos en las leyes. En tales casos se reconocen los derechos a:
  - a) Solicitar una supervisión e intervención humana;
  - b) Impugnar las decisiones automatizadas o algorítmicas.
3. **Cuando se trata de servicios que puedan afectar significativamente los derechos fundamentales de los ciudadanos**, se deberá informar a las personas sobre el uso de **servicios basados en Inteligencia Artificial** que se comuniquen con seres humanos utilizando el lenguaje natural en todas sus formas. Deberá garantizarse en todo caso la asistencia por un ser humano a solicitud de la persona interesada.

4. Se prohíbe el uso de **servicios basados en Inteligencia Artificial** dirigidos a manipular o perturbar la voluntad de las personas, en cualesquiera aspectos que afecten a los derechos fundamentales.

#### Comentarios:

*En primer lugar, conviene destacar la importancia de **evitar regular una tecnología en particular**, sin especificar de qué servicios se trata. En el texto propuesto se realizan además manifestaciones imprecisas y que puede dar lugar a afirmaciones improcedentes.*

*Los derechos y obligaciones que se establezcan puedan ser muy relevantes para determinados servicios basados en Inteligencia Artificial cuando impacten negativamente sobre los derechos de las personas, pero irrelevantes y/o contraproducentes en otros casos en los que no concurra esta circunstancia.*

*Por ello, tanto la UE como el Consejo de Europa han adoptado un enfoque basado en el riesgo. Es decir, se identifican los servicios de alto riesgo ("high risk") a los que se le aplicaría un régimen normativo determinado, frente a otros en los que se aplicaría otros enfoques como una autorregulación basada en principios éticos.*

*Respecto al primer punto de este apartado, **consideramos que se debería prestar atención al debate legislativo abierto a nivel europeo sobre esta clase de derechos con el fin de adoptar una posición coherente con los mismos.***

*Además, la Carta no explica qué significa en la práctica transparencia, auditabilidad, explicabilidad y trazabilidad de los servicios basados en Inteligencia Artificial.*

*Respecto al segundo punto, se propone su eliminación parcial. El motivo es que la Carta excede lo establecido en el RGPD puesto que éste limita el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado que esta produzca efectos jurídicos en él o le afecten significativamente de modo similar. La Carta incluye las decisiones que empleen procedimientos de inteligencia artificial y esto excede lo regulado en el art. 22.1 del RGPD.*

*Respecto al tercer punto en el que se establece que "(...) Deberá garantizarse en todo caso la asistencia por un ser humano a solicitud de la persona interesada", esta obligación deberá estar sujeta al riesgo inherente al servicio. De tal modo que sería necesario incluir una distinción de los riesgos –si es que existen– del uso de la Inteligencia Artificial puesto que cada uso no impactará de igual modo a las personas.*

*Actualmente existen una gran variedad de servicios que mejoran la eficacia de sus prestaciones, con una mayor personalización sin que ello repercuta negativamente sobre los derechos de las personas.*

*En este sentido, la obligatoriedad de este derecho debe estar sujeta a la naturaleza del servicio y al eventual impacto que pueda tener sobre el derecho de la persona.*

***Este apartado queda condicionado por el derecho a la limitación de localización y perfilado prevista en la Carta**, ya que, en particular el perfilado, es una técnica ampliamente utilizada en algunos servicios basados en Inteligencia Artificial.*

***Limitar la elaboración de perfiles, es limitar, de facto, el desarrollo de determinadas áreas de la inteligencia artificial.***

*En conclusión, **se hace necesario resolver estas incongruencias y respetar los principios rectores de las normativas que actualmente ya regulan el uso de estas tecnologías, y que por tanto ya regulan correctamente estos puntos de la Carta.***

## XXIV

### Derechos digitales en el empleo de las neurotecnologías

1. Las condiciones, límites y garantías de implantación y empleo en las personas de las neurotecnologías serán reguladas por la ley con la finalidad de:

- a) Preservar la identidad individual como conciencia de la persona sobre sí misma.
- b) Garantizar la autodeterminación individual, soberanía y libertad en la toma de decisiones.
- c) Asegurar la confidencialidad y seguridad de los datos obtenidos o relativos a sus procesos cerebrales y el pleno dominio y disposición sobre los mismos **salvo en los casos determinados por la ley.**
- d) Ordenar el uso de interfaces persona-máquina susceptibles de afectar a la integridad física o psíquica.
- e) Asegurar que las decisiones y procesos basados en neurotecnologías no sean condicionadas por el suministro de datos, programas o informaciones incompletos, no deseados, desconocidos o sesgados, o por intromisión en conexiones neuronales.

2. Para garantizar la dignidad de la persona, la igualdad y la no discriminación, y de acuerdo en su caso con los tratados y convenios internacionales, la ley regulará aquellos supuestos y condiciones de empleo de las neurotecnologías que, más allá de su aplicación terapéutica, pretendan el aumento cognitivo o la estimulación o potenciación de las capacidades de las personas.

---

#### Comentarios:

*Respecto a este punto, indicar que, nuevamente, vemos innecesario establecer principios rectores, derechos u obligaciones relativas al empleo de estas tecnologías en la Carta, especialmente dado que se encuentran en un estado de desarrollo muy temprano y no se tienen referencias ni información sobre el impacto de las mismas.*

*Consideramos que sería más prudente realizar una evaluación de impacto de estas tecnologías antes de avanzar en el establecimiento de principios, derechos u obligaciones al respecto. Hacerlo de otro modo, corre el riesgo de impactar negativamente su desarrollo, algo totalmente innecesario en esta fase de desarrollo*

## XXV

### Garantía de los derechos en los entornos digitales

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación sectorial específica, todas las personas tienen derecho a la tutela administrativa y judicial de sus derechos en los entornos digitales-

2. Cuando la lesión de tales derechos, o el daño causado, produzca sus efectos en territorio español podrá invocarse la garantía de estos derechos por la autoridad administrativa o el órgano jurisdiccional competente en España.

3. Se promoverán mecanismos de autorregulación regulada y procedimientos de resolución alternativa de conflictos.

4. Los poderes públicos evaluarán las leyes administrativas y procesales vigentes a fin de examinar su adecuación al entorno digital y propondrán en su caso la realización de reformas oportunas en garantía de los derechos digitales.

